



Asamblea General

Distr. general
22 de agosto de 2014
Español
Original: inglés

Sexagésimo noveno período de sesiones

Tema 68 del programa provisional*

Derecho de los pueblos a la libre determinación

Derecho de los pueblos a la libre determinación

Informe del Secretario General

Resumen

En su resolución [68/153](#), la Asamblea General solicitó al Secretario General que en su sexagésimo noveno período de sesiones le presentase un informe sobre la realización universal del derecho de los pueblos a la libre determinación. Este informe se ha preparado de conformidad con esa solicitud.

En el informe se reseña la jurisprudencia pertinente del Comité de Derechos Humanos y del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre las normas de derechos humanos basadas en tratados relativas a la realización del derecho de los pueblos a la libre determinación. También se incluye un resumen sobre los acontecimientos relacionados con el examen de la cuestión por el Consejo de Derechos Humanos, en particular por sus procedimientos especiales. En el informe se sintetiza, además, la información de interés sobre el derecho a la libre determinación que figura en el informe del Secretario General al Consejo de Seguridad sobre la situación relativa al Sáhara Occidental.

* [A/69/150](#).



I. Introducción

1. En su resolución [68/153](#), la Asamblea General reafirmó la importancia que revestía la realización universal del derecho de los pueblos a la libre determinación, a fin de garantizar y respetar efectivamente los derechos humanos. La Asamblea acogió con beneplácito el ejercicio progresivo del derecho a la libre determinación de los pueblos sometidos a ocupación colonial, extranjera o externa y su acceso a la condición de Estados soberanos e independientes.

2. Este informe se presenta de conformidad con el párrafo 5 de la resolución [68/153](#), en el que la Asamblea General solicitó al Consejo de Derechos Humanos que siguiera prestando especial atención a las violaciones de los derechos humanos, especialmente del derecho a la libre determinación, resultante de la intervención, agresión u ocupación militar extranjera; y con el párrafo 6, en el que la Asamblea solicitó al Secretario General que le informase sobre la cuestión en su sexagésimo noveno período de sesiones.

3. En el informe se resumen los principales acontecimientos que guardan relación con la realización del derecho a la libre determinación en el marco de las actividades de los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas desde que se presentó el último informe ([A/68/318](#)). Se incluyen las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que se basan en su examen de los informes periódicos presentados por los Estados partes en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sobre la realización del derecho a la libre determinación garantizado en el artículo 1 común a ambos Pactos.

4. Asimismo, en el informe se incluye el examen de la cuestión por el Consejo de Derechos Humanos, en particular las observaciones formuladas en los informes presentados al Consejo por el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967 y el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas. Por último, en el informe se resumen las principales observaciones relacionadas con el derecho a la libre determinación formuladas por el Secretario General en su último informe al Consejo de Seguridad sobre la situación relativa al Sáhara Occidental ([S/2014/258](#)).

II. Comité de Derechos Humanos y Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

5. El derecho de todos los pueblos a la libre determinación se reconoce tanto en el artículo 1, párrafo 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como en el artículo 1, párrafo 1, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En el artículo 1, párrafo 2, de ambos Pactos se afirma un aspecto particular del contenido económico de ese derecho, a saber, el derecho de los pueblos, para el logro de sus fines, a “disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio de beneficio recíproco, así como del derecho internacional”. También se dispone que “[e]n ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia”. En el artículo 1, párrafo 3, de los dos Pactos se impone a los Estados partes, incluso a los que tienen la

responsabilidad de administrar Territorios No Autónomos y Territorios en Fideicomiso, la obligación de promover el ejercicio de ese derecho y de respetarlo, de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, en particular con el artículo 1, párrafo 2.

6. El Comité de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se han ocupado de la cuestión del derecho a la libre determinación al examinar los informes periódicos de los Estados partes presentados con arreglo al artículo 40 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y los artículos 16 y 17 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Las observaciones finales pertinentes aprobadas durante el período que se examina se destacan a continuación.

A. Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos

7. Durante sus períodos de sesiones 108º, 109º y 110º, objeto del examen de este informe, el Comité de Derechos Humanos abordó varias cuestiones relacionadas con el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas en el Estado Plurinacional de Bolivia, Finlandia y los Estados Unidos de América.

8. En sus observaciones finales sobre el Estado Plurinacional de Bolivia, el Comité acogió con satisfacción el anteproyecto de ley marco sometido a la consulta de los pueblos indígenas mencionados por el Estado parte, pero manifestó su preocupación ante informaciones que indicaban que, en lo referente a proyectos extractivos, el anteproyecto de ley solo reconocía la consulta a los pueblos afectados y no su consentimiento libre, previo e informado. Al Comité también le inquietaban las denuncias de las tensiones generadas en el Parque Nacional Isiboro Sécore y Territorio Indígena por el proyecto de construcción de una carretera que no contaba con el apoyo de todas las comunidades afectadas. El Comité recomendó que se recabara el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas cuando se adoptaran decisiones en relación con proyectos que repercutieran en sus derechos, y que, en particular, todas las comunidades indígenas afectadas participaran en el proceso de consultas y sus opiniones se tuvieran debidamente en cuenta. El Comité recomendó también que el Estado parte velara por que se obtuviera el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas a través de sus instituciones representativas antes de que se adoptara cualquier medida que pusiera en peligro sus actividades económicas de importancia cultural o interfiriera sustancialmente en ellas (*CCPR/C/BOL/CO/3*, párr. 25).

9. En sus observaciones finales sobre Finlandia, el Comité expresó preocupación por el hecho de que el pueblo sami careciera de posibilidades de participar en cuestiones que eran de importancia esencial para su cultura y modo de vida, en particular los derechos a la tierra y los recursos, así como de capacidad de decisión al respecto. El Comité recomendó a Finlandia que promoviera el goce efectivo por el pueblo sami de sus derechos reforzando la capacidad de adopción de decisiones de las instituciones representativas sami, como el Parlamento sami, y que redoblara sus esfuerzos encaminados a revisar su legislación a fin de garantizar plenamente los derechos del pueblo sami en sus tierras tradicionales, velando por el respeto del derecho de las comunidades sami a participar de forma libre, previa e informada en los procesos de políticas y de desarrollo que les afectaran (*CCPR/C/FIN/CO/6*, párr. 16).

10. En sus observaciones finales sobre el informe de los Estados Unidos de América, el Comité expresó su preocupación por el limitado acceso de los pueblos indígenas a las zonas sagradas, que eran esenciales para la preservación de sus prácticas religiosas, culturales y espirituales, y la insuficiencia de las consultas realizadas con los pueblos indígenas sobre asuntos de interés para sus comunidades. El Comité pidió al Estado parte que adoptara medidas para proteger de manera efectiva las zonas sagradas, y asegurara la celebración de consultas con las comunidades indígenas que pudieran verse afectadas negativamente por los proyectos de desarrollo y la explotación de los recursos naturales del Estado parte, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado para las actividades propuestas de los proyectos ([CCPR/C/USA/CO/4](#), párr. 25).

B. Observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

11. Durante sus períodos de sesiones 51º y 52º, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales abordó aspectos pertinentes del derecho a la libre determinación en sus observaciones finales sobre China, El Salvador, el Gabón e Indonesia en relación con los derechos de los pueblos indígenas.

12. En sus observaciones finales sobre el informe de China, el Comité manifestó su preocupación por el reasentamiento de los pastores nómadas en las “nuevas aldeas socialistas” llevado a cabo en el Estado parte sin celebrar las debidas consultas, y, en la mayoría de los casos, sin su consentimiento libre, previo e informado, en particular en las provincias occidentales y las regiones autónomas. Instó a China a que adoptara todas las medidas necesarias para poner fin de inmediato al reasentamiento no voluntario de los pastores nómadas fuera de sus tierras tradicionales y a los programas de reubicación o realojamiento no voluntarios dirigidos a otros residentes en zonas rurales, y recomendó que el Estado parte celebrara consultas significativas con las comunidades afectadas a fin de examinar y evaluar todas las opciones disponibles ([E/C.12/CHN/CO/2](#), párr. 31).

13. En sus observaciones finales sobre el informe de El Salvador, el Comité celebró que la Asamblea Legislativa hubiera aprobado una reforma constitucional para otorgar reconocimiento legal a los pueblos indígenas, pero manifestó su preocupación por el hecho de que se desconociera el número de personas indígenas existentes en el país. El Comité instó al Parlamento de El Salvador a que ratificara la reforma constitucional y a que realizara un censo de la población indígena ([E/C.12/SLV/CO/3](#) a 5, párr. 7).

14. En sus observaciones finales sobre el informe del Gabón, el Comité lamentó la falta de un marco reglamentario o legislativo claro que permitiera sistematizar las prácticas para hacer efectivo el derecho a una consulta previa e informada de los pueblos indígenas cuando debieran tomarse decisiones acerca de la explotación de recursos naturales en sus territorios tradicionales. El Comité recomendó al Estado parte que garantizara la aplicación efectiva y sistemática del principio de consulta previa consultando a los pueblos indígenas con el tiempo y el espacio necesarios para la reflexión y la adopción de decisiones, y permitiendo la libre expresión y el respeto de su consentimiento para la realización de un proyecto ([E/C.12/GAB/CO/1](#), párr. 6).

15. En sus observaciones finales sobre Indonesia, el Comité expresó su preocupación por el hecho de que la ley no protegiera debidamente los derechos de

los pueblos indígenas (*Masyarakat Hukum Adat*) como consecuencia de la falta de coherencia de las disposiciones legislativas correspondientes. El Comité instó al Estado parte a que agilizar la aprobación del proyecto de ley sobre los derechos de los pueblos indígenas, garantizando efectivamente su derecho inalienable a la propiedad, el desarrollo, el control y la utilización de sus tierras ancestrales y de sus recursos, y definiera unos mecanismos que garantizaran el respeto de su consentimiento libre, informado y previo en las decisiones que les atañesen y en las que afectasen a sus recursos, así como una compensación suficiente y recursos efectivos en caso de infracción (E/C.12/IDN/CO/1, párr. 38).

III. Consejo de Derechos Humanos

A. Resoluciones

16. En su 24º período de sesiones, celebrado entre el 9 y el 27 de septiembre de 2013, el Consejo de Derechos Humanos aprobó la resolución 24/13 sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación. El Consejo de Derechos Humanos instó a todos los Estados a tomar las medidas necesarias y a ejercer la máxima vigilancia contra la amenaza que entrañaban las actividades de los mercenarios y a adoptar medidas legislativas para asegurar que ni su territorio ni otros territorios bajo su control, como tampoco sus nacionales, fueran utilizados para el reclutamiento, la concentración, la financiación, el entrenamiento, la protección y el tránsito de mercenarios con el propósito de planificar actividades encaminadas a obstaculizar el ejercicio del derecho a la libre determinación, derrocar al gobierno de un Estado o destruir o menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial o la unidad política de los Estados soberanos e independientes que actuaban de conformidad con el derecho de los pueblos a la libre determinación.

17. En su 25º período de sesiones, celebrado entre el 3 y el 28 de marzo de 2014, el Consejo de Derechos Humanos examinó la cuestión del ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación, en relación con el tema 7 del programa, y aprobó la resolución 25/27 relativa al derecho del pueblo palestino a la libre determinación. El Consejo reafirmó el derecho inalienable, permanente e incondicional del pueblo palestino a la libre determinación, incluido el derecho a vivir en libertad, justicia y dignidad, y a establecer su propio Estado contiguo soberano, independiente, democrático y viable. El Consejo confirmó que el derecho del pueblo palestino a la soberanía permanente sobre sus riquezas y recursos naturales debía ejercerse en interés del desarrollo nacional y del bienestar del pueblo palestino y para hacer efectivo su derecho a la libre determinación, e instó a todos los Estados Miembros y los órganos competentes del sistema de las Naciones Unidas a que prestasen apoyo y asistencia al pueblo palestino para hacer efectivo con prontitud su derecho a la libre determinación.

B. Procedimientos especiales

18. En su informe presentado en el 25º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967 abordó la cuestión de los

asentamientos israelíes en la Ribera Occidental, incluida Jerusalén Oriental, y del muro en el contexto del décimo aniversario de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en el territorio palestino ocupado. En relación con la opinión consultiva, dijo que había llegado el momento de estudiar qué medidas legítimas podía adoptar la comunidad internacional para lograr que se aplicara el derecho internacional, de conformidad con la Corte Internacional de Justicia, y exhortó a las Naciones Unidas a adoptar medidas destinadas a proteger los derechos del pueblo palestino asumiendo la inviolabilidad de su territorio y su relación con el derecho subyacente a la libre determinación ([A/HRC/25/67](#), párr. 21).

19. El Relator Especial también examinó las políticas y las prácticas de Israel en Palestina ocupada a la luz de la prohibición internacional de la discriminación étnica, la segregación y el *apartheid*. Concluyó que, en vista de la ocupación prolongada, con prácticas y políticas que parecían constituir *apartheid* y segregación, la ampliación constante de los asentamientos y la construcción continua del muro, que podrían equivaler a una anexión *de facto* de partes del Territorio Palestino Ocupado, resultaba evidente que Israel denegaba al pueblo palestino el derecho a la libre determinación (*ibid.*, párr. 78).

20. El Relator Especial recomendó que se respetaran y se aplicaran plenamente los derechos jurídicos de los palestinos, incluido el derecho a la libre determinación, con miras a alcanzar una solución pacífica y justa al conflicto entre estos dos pueblos. Además, recomendó que el Consejo de Derechos Humanos designara un grupo de expertos para idear un protocolo especial del IV Convenio de Ginebra con el fin específico de proponer un régimen jurídico para cualquier ocupación que durara más de cinco años (*ibid.*, párr. 81).

21. En su informe presentado en el 24º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas abordó el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas en el contexto de las industrias extractivas ([A/HRC/24/41](#)). Observó que el modelo de negocio que aún prevalecía en la mayoría de los lugares de extracción de recursos naturales en territorios indígenas, en el que una empresa externa, con el apoyo del Estado, controlaba la operación de extracción y se apropiaba de las ganancias, no era totalmente propicio a la realización de los derechos de los pueblos indígenas, en particular su derecho a la libre determinación, sus derechos de propiedad y sus derechos culturales relacionados con las tierras y los recursos afectados (*ibid.*, párr. 4). Afirmó que debían examinarse y desarrollarse nuevos modelos de negocio para la extracción de recursos naturales, y añadió que, en algunos casos, los pueblos indígenas estaban estableciendo y administrando sus propias empresas para extraer y explotar los recursos naturales. Consideró que la opción de extracción de recursos controlada por los indígenas, por su propia naturaleza, era más propicia al ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas a la libre determinación, a sus tierras y recursos, a un desarrollo culturalmente apropiado y otros derechos conexos de conformidad con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y otras fuentes internacionales de autoridad (*ibid.*, párr. 8).

22. El Relator Especial recordó que en la Declaración se establece que “los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios” (artículo 32, párr. 1), como parte de su derecho a la libre determinación. Ese derecho entraña necesariamente el derecho

de los pueblos indígenas a emprender sus propias iniciativas para extraer los recursos de sus territorios si así lo desean. No obstante, a juicio del Relator Especial, incluso la extracción de recursos por sus propias empresas podía plantear algunos riesgos al disfrute de los derechos humanos de los miembros de las comunidades indígenas, en particular en relación con el medio ambiente natural. Sin embargo, la experiencia demostraba que esos riesgos podían reducirse, al tiempo que se aumentaba el disfrute del derecho a la libre determinación y otros derechos conexos, cuando los pueblos indígenas elegían libremente crear sus propias empresas de extracción de recursos respaldados por una adecuada capacidad y por instituciones internas de gobierno (A/HRC/24/41, párr. 11).

23. El Relator Especial observó además que, del mismo modo que los pueblos indígenas tenían derecho a emprender sus propias iniciativas para la extracción de recursos, en el marco de su derecho a la libre determinación, y a establecer sus propias estrategias de desarrollo, tenían también derecho a negarse a emprender ese tipo de iniciativas en favor de otras iniciativas para su desarrollo sostenible, y también se les debería prestar apoyo con esas otras actividades (*ibid.*, párr. 82).

24. Por último, el Relator Especial recordó que, como regla general, era obligatorio obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas para realizar actividades extractivas dentro de los territorios indígenas y como salvaguardia de sus derechos internacionalmente reconocidos. El consentimiento podía ser también necesario cuando las actividades extractivas afectasen de otro modo a los pueblos indígenas, en función de la naturaleza de las actividades y de su impacto potencial en el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas (*ibid.*, párrs. 84 y 85).

IV. Consejo de Seguridad

La situación relativa al Sáhara Occidental

25. En cumplimiento de la resolución 2099 (2013) del Consejo de Seguridad, el Secretario General presentó al Consejo un informe sobre la situación relativa al Sáhara Occidental (S/2014/258). En su informe recordó los últimos acontecimientos en el Sáhara Occidental, donde la situación durante el período que abarca el informe se mantuvo tranquila en general. Se produjeron, no obstante, algunas manifestaciones esporádicas que tenían por fin poner de relieve preocupaciones relativas a los derechos humanos, problemas socioeconómicos y reivindicaciones políticas, incluido el derecho de libre determinación.

26. En el informe se hacía referencia a las violaciones de los derechos civiles y políticos, y se señalaba que las Naciones Unidas siguieron recibiendo comunicaciones en las que se denunciaban casos de abuso de esos derechos en el Sáhara Occidental al oeste de la berma, al igual que en los campamentos de refugiados, sobre todo en forma de restricciones a las libertades (*ibid.*, párrs. 78 y 83). En el informe se hacía alusión también a las preocupaciones que existían acerca de la explotación de los recursos naturales en la parte del Territorio que está bajo control de Marruecos, así como en las aguas territoriales adyacentes al Sáhara Occidental (*ibid.*, párrs. 11 y 12). A este respecto, en el informe se indicaba que era oportuno exhortar a todos los agentes pertinentes a que reconocieran el principio de que los intereses de los habitantes de esos territorios estaban por encima de todo, de conformidad con el artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas (*ibid.*, párr. 97).

27. Además, el informe daba cuenta de las actividades del Enviado Personal del Secretario General para el Sáhara Occidental, que había decidido comenzar consultas bilaterales con las partes y los Estados vecinos en 2013 para determinar si las partes estaban dispuestas a actuar con flexibilidad en la elaboración de los elementos de una solución de avenencia y en qué forma los Estados vecinos podían prestar asistencia. A este respecto, el Enviado Personal del Secretario General había emprendido tres rondas de consultas con las partes y los Estados vecinos, durante las que dejó claro que en las conversaciones habría que ocuparse del fondo de una solución política mutuamente aceptable y los medios con los cuales el pueblo del Sáhara Occidental ejercería su derecho a la libre determinación.

28. En el período comprendido entre noviembre de 2013 y marzo de 2014, el Enviado Personal del Secretario General inició una nueva serie de consultas con miembros del Grupo de Amigos del Sáhara Occidental, visitando sucesivamente Washington D.C., París y Madrid. En esas consultas, solicitó nuevas muestras de apoyo de sus interlocutores para su nuevo enfoque y para su insistencia en la necesidad de que las partes trataran tanto el fondo de una solución política mutuamente aceptable como los medios para ejercer la libre determinación. Sus interlocutores en las tres capitales expresaron su apoyo al respecto. También solicitó que los miembros del Grupo se sumasen a él para convencer a las partes de que era necesario actuar con flexibilidad en la búsqueda de una solución de avenencia.

29. En las conclusiones de su informe, el Secretario General exhortó a las partes a que reconocieran la necesidad de lograr progresos con urgencia y de interactuar seriamente en lo que se refería a las dos cuestiones básicas incluidas en las orientaciones del Consejo de Seguridad, a saber, el fondo de la solución política y los medios de alcanzar la libre determinación. Además, pidió a la comunidad internacional, y en particular a los Estados vecinos y los miembros del Grupo de Amigos, que prestasen su apoyo a esa empresa. Añadió que si de todos modos no se registraran progresos para abril de 2015, los miembros del Consejo de Seguridad tendrían que hacer un examen del marco para el proceso de negociación fijado en abril de 2007 (*ibid.*, párr. 94).

30. Una vez examinado el informe del Secretario General sobre la situación relativa al Sáhara Occidental, el Consejo de Seguridad aprobó la resolución [2152 \(2014\)](#). En la resolución, el Consejo exhortó a las partes a que continuasen las negociaciones bajo los auspicios del Secretario General, sin condiciones previas y de buena fe, teniendo en cuenta los esfuerzos realizados desde 2006 y los acontecimientos posteriores, con miras a lograr una solución política justa, duradera y mutuamente aceptable, que previera la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental en el marco de disposiciones conformes a los principios y propósitos de la Carta. El Consejo también hizo notar la función y las obligaciones que incumbían a las partes a ese respecto.

V. Conclusión

31. **El derecho a la libre determinación está consagrado tanto en el artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En el período que abarca el informe, los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos, el Consejo de Derechos Humanos, incluidos los titulares de mandatos de procedimientos especiales, y el Consejo de Seguridad siguieron ocupándose de cuestiones relacionadas con la realización de ese derecho.**